

Inmunidad sin crédito: lo que la reforma tributaria de Brasil revela sobre el IVA y las OSFL en toda la región

Daniel Sarmiento P.¹

Presidente OSFL LATAM

La reforma tributaria brasileña que empezó su transición este año resolvió, en apariencia, la pregunta que más ansiedad genera entre las entidades filantrópicas cuando un país rediseña su sistema de impuestos al consumo: si van a seguir pagando IVA o no. La respuesta que dio el Congreso fue tranquilizadora en el titular e incómoda en la letra menuda. Las instituciones de educación y asistencia social sin fines lucrativos conservan su inmunidad constitucional frente al nuevo Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) y a la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), los dos tributos que desde 2026 empiezan a sustituir, en un proceso escalonado que se extiende hasta 2033, al ISS (Impuestos sobre Servicios de Cualquier Naturaleza), el ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios), el PIS (Programa de Integración Social) y la Cofins (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social). Pero esa misma ley les niega, de forma expresa, el derecho a acreditar el impuesto que pagan cuando compran bienes y servicios. El resultado no es una carga nueva y visible, del tipo que se discute en asamblea y se reclama ante un tribunal. Es un costo que se queda incrustado en cada factura de insumos médicos, de energía o de tecnología, sin que nadie lo devuelva.

Vale la pena detenerse en el caso brasileño no por curiosidad comparada, sino porque expone con una nitidez inusual un problema que las OSFL de toda la región cargan desde hace años sin nombrarlo bien: la inmunidad o la exención de IVA casi nunca protege a la organización completa. Protege una operación puntual, y deja fuera el costo tributario que esa misma organización absorbe río arriba, en sus compras. Entender esa distinción, no solo en Brasil sino en cada jurisdicción donde opera una OSFL, es hoy una competencia de gestión financiera tan relevante como saber leer un flujo de caja.

Cómo quedó diseñada la inmunidad en la reforma brasileña

La Enmienda Constitucional 132 de 2023 fijó el marco general de la reforma y la Ley Complementaria 214 de 2025 lo desarrolló en detalle. Su artículo 9, inciso III, mantiene la inmunidad frente al IBS y la CBS para los partidos políticos, las entidades sindicales de trabajadores y las instituciones de educación y de asistencia social sin fines lucrativos que cumplan los requisitos del artículo 14 del Código Tributario Nacional, entre ellos la aplicación íntegra de sus recursos en el país y la ausencia de distribución de excedentes. Hasta ahí, la norma no innova frente al régimen anterior. El cambio está en el parágrafo 4 del mismo artículo, que precisa que esa inmunidad no se extiende a las

¹ El borrador inicial de este documento contó con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial generativa como asistente de redacción. El texto final fue revisado, verificado, modificado y validado íntegramente por el autor, quien asume la autoría total y la responsabilidad por su contenido.

adquisiciones de bienes, derechos y servicios que hagan esas entidades. Dicho de otro modo: la organización no cobra IBS ni CBS por lo que presta, pero paga ambos tributos, sin posibilidad de descuento, por todo lo que compra para poder prestarlo.

En un IVA moderno, no cumulativo por diseño, esa asimetría pesa más que en un sistema de impuestos en cascada como el que Brasil dejó atrás. El mecanismo de crédito fiscal existe precisamente para que el tributo no se acumule en cada eslabón de la cadena de producción; cuando una entidad queda excluida de ese mecanismo por el lado de las compras y al mismo tiempo inmune por el lado de las ventas, termina absorbiendo el impuesto pagado por sus proveedores como un costo operativo permanente, sin ningún actor aguas abajo que lo compense.

El caso más citado por los analistas tributarios brasileños es el de los hospitales filantrópicos certificados como entidades de Beneficencia de Asistencia Social en Salud, que atienden entre el 50 % y el 65 % de los procedimientos del Sistema Único de Salud en algunas regiones del país. Un tomógrafo o un insumo médico de alta complejidad, sujetos a las nuevas alícuotas combinadas de IBS y CBS que rondan el 27 % en el régimen general, cuesta más para un hospital filantrópico que para uno privado con capacidad de acreditar ese mismo impuesto contra sus ventas gravadas. El *Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas* ya prepara un proyecto de ley para corregir esa asimetría durante el período de transición, que corre hasta 2033 y que, mientras dure, sigue siendo la ventana de incidencia política más realista que tiene el sector.

Sobre el Impuesto a las Donaciones y Herencias (ITCMD), la Ley Complementaria 214 de 2025 tampoco introdujo una exclusión expresa a favor de las entidades sin fines de lucro, un vacío que ha llevado a las firmas de asesoría tributaria de Sao Paulo a recomendar que cada entidad revise, estado por estado, el tratamiento local de las donaciones que recibe, porque el ITCMD sigue siendo un tributo de competencia estadual y no quedó unificado por la reforma federal.

El mismo problema, con otro nombre, en el resto de la región

Lo que hace valioso el caso brasileño para un lector colombiano, mexicano o peruano no es su singularidad sino lo contrario: la misma lógica de fondo opera, con matices, en los regímenes de IVA de casi toda la región, solo que rara vez se explica con tanta claridad como acaba de hacerlo el debate legislativo brasileño.

En Colombia, el error de interpretación más común entre las propias entidades sin ánimo de lucro es asumir que su calificación en el Régimen Tributario Especial las exime automáticamente de IVA. No es así. El IVA colombiano es, en los términos del artículo 437 del Estatuto Tributario, un impuesto real que se causa por la venta de bienes o la prestación de servicios, sin que la calidad del sujeto que los realiza altere esa causación. Una ESAL puede estar exenta de cobrar IVA en una operación puntual porque el servicio que presta está excluido (educación formal, ciertos servicios de salud), pero eso es un beneficio de la actividad, no de la entidad, y el propio concepto DIAN 007833 de 2017 lo confirma. Si la ESAL solo realiza actividades excluidas, tampoco tiene derecho a descontar el IVA que pagó en sus compras, exactamente la misma asimetría que Brasil acaba de legislar de forma explícita.

México resuelve el problema por una vía distinta, aunque con una fricción parecida en la práctica contable. La Ley del IVA exime del impuesto ciertos actos de las donatarias autorizadas (enajenación de bienes, prestación de servicios, arrendamiento de inmuebles e importación de bienes donados, conforme a los artículos 9, 15, 22 y 25), y trata los donativos recibidos como operaciones "no objeto" del impuesto en los términos del artículo 8, una categoría distinta de la exención que obliga a las donatarias a clasificar con precisión cada acto en su facturación electrónica para no incurrir en errores que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) sanciona con frecuencia. El riesgo aquí no es tanto el costo tributario residual como el riesgo de cumplimiento formal: una donataria que confunde "exento" con "no objeto" en su CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) se expone a observaciones que pueden escalar hasta la revocación de su autorización, el mismo instrumento que el SAT ha usado con mayor severidad desde 2025.

Perú, mientras tanto, no tocó el diseño del beneficio tributario por donaciones pero sí endureció el control administrativo sobre su uso. La Resolución de Superintendencia 000077-2026/SUNAT, publicada el 4 de mayo de 2026, obliga a formalizar toda solicitud de donación o adjudicación de bienes a través de un aplicativo informático que se convirtió en el único canal válido, y condiciona la deducibilidad del gasto (hasta el 10 % de la renta neta empresarial, según el inciso x del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta) a que la entidad receptora mantenga vigente su calificación ante la Sunat. No es un problema de crédito fiscal como en Brasil ni de clasificación de actos como en México, sino un problema de vigencia administrativa: la entidad perceptora que deja vencer su calificación, aunque sea por un descuido de trámite, convierte retroactivamente en no deducibles las donaciones que reciba mientras dure la irregularidad.

Por qué esto es un asunto de gestión financiera y no solo de cumplimiento tributario

El hilo que conecta los tres casos no es normativo sino financiero. En ningún régimen de la región la condición de OSFL garantiza, por sí sola, neutralidad tributaria completa. Lo que cambia de país a país es dónde se filtra el costo: en Brasil se filtra en el lado de las compras, por la imposibilidad de acreditar; en Colombia, en la frontera entre actividad gravada y excluida, que exige una contabilidad de ingresos y costos segregada con rigor; en México, en el riesgo de clasificación formal que puede costar la autorización completa; en Perú, en la vigencia ininterrumpida de un registro administrativo. Tratar cualquiera de estos frentes como un trámite que resuelve el área contable una vez al año subestima su impacto real sobre el presupuesto operativo.

Implicaciones prácticas para las OSFL de la región

La consecuencia operativa más directa es que el IVA o su equivalente dejó de ser, para cualquier OSFL con estructura de costos intensiva en compras (salud, insumos tecnológicos, infraestructura), una línea neutral en el presupuesto. Conviene incorporar algunas prácticas concretas:

- *Cuantificar el impuesto residual como una partida presupuestal explícita, no como un costo diluido dentro de cada compra.* Las organizaciones que operan hospitales, laboratorios o

infraestructura educativa deberían estimar, al menos anualmente, cuánto representa el IVA o el IBS/CBS no acreditable sobre su gasto de capital y de insumos, porque es la única forma de negociar con seriedad ajustes de tarifa en contratos con el Estado, como los que sostienen a buena parte de los hospitales filantrópicos brasileños vinculados al PROADI-SUS (Programa de Apoyo al Desarrollo Institucional del Sistema Único de Salud).

- *Segregar contablemente actividades gravadas y excluidas desde el registro de la operación, no al momento de declarar.* En Colombia y en México, buena parte de los hallazgos de la administración tributaria contra ESAL y donatarias se originan en una contabilidad que mezcla ingresos y costos sin trazabilidad clara entre lo gravado y lo excluido.
- *Instalar un calendario de vigencia de calificaciones y registros como función de cumplimiento permanente, no estacional.* El caso peruano deja una lección exportable a cualquier país que condicione beneficios a un registro activo: la pérdida de vigencia, aunque sea temporal, tiene efecto retroactivo sobre operaciones ya ejecutadas.
- *Participar, mientras exista ventana para hacerlo, en los procesos de ajuste normativo.* El período de transición brasileño hasta 2033 y la reglamentación aún pendiente en varios países de la región son, en la práctica, la única etapa en la que el sector puede incidir sobre el diseño técnico del beneficio antes de que quede consolidado.

Una asimetría que conviene nombrar con precisión

El aporte más útil del debate brasileño no es la solución, que todavía no existe, sino el vocabulario. Hablar de "impuesto residual no acreditable" en lugar de "carga tributaria" a secas obliga a cuantificar el problema y a discutirlo con cifras concretas frente a un ministerio de hacienda o un congreso, en lugar de apelar de forma genérica a la condición sin ánimo de lucro de la entidad. Las OSFL de la región llevan años pidiendo, con razón, mayor rigor técnico en su información financiera; ese mismo rigor, aplicado a medir el costo tributario que no se ve en ningún estado de resultados porque quedó absorbido en el costo de ventas, es la herramienta que les falta para participar en el diseño de las reformas que las afectan, en lugar de reaccionar a ellas una vez publicadas.

Fuentes

- Presidência da República / Casa Civil, *Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025* (Brasil). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm
- Observatório do Terceiro Setor, *A Reforma Tributária e os desafios para as instituições filantrópicas*, 19 de diciembre de 2025 (Brasil). <https://observatorio3setor.org.br/a-reforma-tributaria-e-os-desafios-para-as-instituicoes-filantropicas/>
- Mattos Filho, *Reforma Tributária e as particularidades do Terceiro Setor* (Brasil). <https://www.mattosfilho.com.br/unico/reforma-tributaria-particularidades-3-setor/>



Corporación Latinoamericana
para el Desarrollo de las OSFL

- Paulo Melo, *O impacto da reforma tributária sobre as entidades filantrópicas: um alerta urgente*, 22 de septiembre de 2026 (Brasil). <https://www.paulomelo.blog.br/2026/09/o-impacto-da-reforma-tributaria-sobre.html>
- Gerencie.com, *Las entidades sin ánimo de lucro no tienen exención de IVA en función de su calidad* (Colombia, con referencia al artículo 437 del Estatuto Tributario y al Oficio DIAN 007833 de 2017). <https://www.gerencie.com/las-entidades-sin-animo-de-lucro-no-tienen-exencion-de-iva-en-funcion-de-su-calidad.html>
- IDC Online, *¿Cuáles son los efectos del IVA para las donatarias autorizadas?* (México, con referencia a los artículos 8, 9, 15, 22 y 25 de la Ley del IVA). <https://idconline.mx/fiscal-contable/2024/11/15/cuales-son-los-efectos-del-iva-para-las-donatarias-autorizadas>
- Infobae Perú, *Sunat cambia las reglas para las donaciones en Perú: ¿cómo afecta a donantes y adjudicatarios?*, 4 de mayo de 2026 (Perú). <https://www.infobae.com/peru/2026/05/04/sunat-cambia-las-reglas-para-las-donaciones-en-peru-como-afecta-a-donantes-y-adjudicatarios/>
- El Peruano, *Sunat precisa la aplicación de la donación como gasto deducible* (Perú, con referencia al inciso x del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta). <https://elperuano.pe/noticia/113096-sunat-precisa-la-aplicacion-de-la-donacion-como-gasto-deducible>

Versão em português

Imunidade sem crédito: o que a reforma tributária do Brasil revela sobre o IVA e as OSFLs em toda a região

A reforma tributária brasileira, que iniciou sua transição neste ano, resolveu, na aparência, a pergunta que mais gera ansiedade entre as entidades filantrópicas quando um país redesenha seu sistema de tributos sobre o consumo: se vão continuar pagando IVA ou não. A resposta dada pelo Congresso foi tranquilizadora na manchete e incômoda na letra miúda. As instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos conservam sua imunidade constitucional diante do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), os dois tributos que, a partir de 2026, começam a substituir, em um processo escalonado que se estende até 2033, o ISS, o ICMS, o PIS e a Cofins. Mas essa mesma lei nega a elas, de forma expressa, o direito de se apropriar do crédito do imposto que pagam ao comprar bens e serviços. O resultado não é um encargo novo e visível, do tipo que se discute em assembleia e se reclama perante um tribunal. É um custo que fica incrustado em cada nota fiscal de insumo médico, de energia ou de tecnologia, sem que ninguém o devolva.

Vale a pena se deter no caso brasileiro não por curiosidade comparada, mas porque ele expõe, com uma nitidez incomum, um problema que as OSFLs de toda a região carregam há anos sem nomeá-lo com precisão: a imunidade ou a isenção de IVA quase nunca protege a organização por inteiro. Ela protege uma operação pontual e deixa de fora o custo tributário que essa mesma organização absorve rio acima, em suas compras. Entender essa distinção, não só no Brasil mas em cada jurisdição onde uma OSFL atua, é hoje uma competência de gestão financeira tão relevante quanto saber ler um fluxo de caixa.

Como ficou desenhada a imunidade na reforma brasileira

A Emenda Constitucional 132, de 2023, fixou o marco geral da reforma, e a Lei Complementar 214, de 2025, o detalhou. Seu artigo 9º, inciso III, mantém a imunidade diante do IBS e da CBS para os partidos políticos, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que cumpram os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, entre eles a aplicação integral de seus recursos no país e a ausência de distribuição de excedentes. Até aí, a norma não inova em relação ao regime anterior. A mudança está no parágrafo 4º do mesmo artigo, que precisa que essa imunidade não se estende às aquisições de bens, direitos e serviços feitas por essas entidades. Em outras palavras: a organização não cobra IBS nem CBS pelo que presta, mas paga os dois tributos, sem possibilidade de desconto, por tudo o que compra para poder prestar esse serviço.

Em um IVA moderno, não cumulativo por desenho, essa assimetria pesa mais do que em um sistema de tributos em cascata como o que o Brasil deixou para trás. O mecanismo de crédito fiscal existe justamente para que o tributo não se acumule em cada elo da cadeia produtiva; quando uma entidade fica excluída desse mecanismo do lado das compras e, ao mesmo tempo, é imune do lado das vendas, ela termina absorvendo o imposto pago a seus fornecedores como um custo

operacional permanente, sem nenhum agente a jusante que o compense. O caso mais citado pelos analistas tributários brasileiros é o dos hospitais filantrópicos certificados como entidades Benéficas de Assistência Social em Saúde, que atendem entre 50% e 65% dos procedimentos do Sistema Único de Saúde em algumas regiões do país. Um tomógrafo ou um insumo médico de alta complexidade, sujeitos às novas alíquotas combinadas de IBS e CBS que giram em torno de 27% no regime geral, custa mais para um hospital filantrópico do que para um hospital privado com capacidade de se apropriar desse mesmo imposto contra suas vendas tributadas. O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas já prepara um projeto de lei para corrigir essa assimetria durante o período de transição, que corre até 2033 e que, enquanto durar, segue sendo a janela de incidência política mais realista que o setor tem.

Sobre o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), a Lei Complementar 214/2025 tampouco introduziu uma exclusão expressa em favor das entidades sem fins lucrativos, uma lacuna que tem levado escritórios de consultoria tributária de São Paulo a recomendar que cada entidade revise, estado por estado, o tratamento local das doações que recebe, já que o ITCMD continua sendo um tributo de competência estadual e não foi unificado pela reforma federal.

O mesmo problema, com outro nome, no resto da região

O que torna o caso brasileiro valioso para um leitor colombiano, mexicano ou peruano não é sua singularidade, mas justamente o contrário: a mesma lógica de fundo opera, com nuances, nos regimes de IVA de quase toda a região, só que raramente é explicada com a clareza que o próprio debate legislativo brasileiro acaba de trazer.

Na Colômbia, o erro de interpretação mais comum entre as próprias entidades sem fins lucrativos é assumir que sua qualificação no Regime Tributário Especial as isenta automaticamente de IVA. Não é o caso. O IVA colombiano é, nos termos do artigo 437 do Estatuto Tributário, um imposto real que incide sobre a venda de bens ou a prestação de serviços, sem que a natureza do sujeito que os realiza altere essa incidência. Uma ESAL pode estar dispensada de cobrar IVA em uma operação pontual porque o serviço que presta é excluído (educação formal, certos serviços de saúde), mas esse é um benefício da atividade, não da entidade, como confirma o próprio parecer da DIAN nº 007833, de 2017. Se a ESAL realiza apenas atividades excluídas, tampouco tem direito a descontar o IVA que pagou em suas compras — exatamente a mesma assimetria que o Brasil acaba de legislar de forma explícita.

O México resolve o problema por uma via distinta, embora com um atrito parecido na prática contábil. A Lei do IVA isenta do imposto certos atos das donatárias autorizadas (venda de bens, prestação de serviços, locação de imóveis e importação de bens doados, conforme os artigos 9º, 15, 22 e 25), e trata as doações recebidas como operações "não objeto" do imposto, nos termos do artigo 8º — uma categoria distinta da isenção, que obriga as donatárias a classificar com precisão cada ato em sua nota fiscal eletrônica para não incorrer em erros que o SAT vem punindo com frequência. O risco aqui não é tanto o custo tributário residual, mas o risco de conformidade formal: uma donatária que confunde "isento" com "não objeto" em seu CFDI se expõe a autuações que podem escalar até a revogação de sua autorização, o mesmo instrumento que o SAT vem usando com maior rigor desde 2025.

O Peru, por sua vez, não mexeu no desenho do benefício tributário por doações, mas endureceu o controle administrativo sobre seu uso. A Resolução de Superintendência 000077-2026/SUNAT, publicada em 4 de maio de 2026, obriga a formalizar toda solicitação de doação ou adjudicação de bens por meio de um aplicativo informático que se tornou o único canal válido, e condiciona a dedutibilidade da despesa (até 10% da renda líquida empresarial, segundo a alínea "x" do artigo 37 da Lei do Imposto de Renda) à manutenção da qualificação vigente da entidade receptora perante a Sunat. Não é um problema de crédito fiscal como no Brasil, nem de classificação de atos como no México, mas um problema de vigência administrativa: a entidade receptora que deixa vencer sua qualificação, ainda que por um descuido de trâmite, torna retroativamente não dedutíveis as doações que receber enquanto durar a irregularidade.

Por que isso é uma questão de gestão financeira, e não apenas de conformidade tributária

O fio que conecta os três casos não é normativo, mas financeiro. Em nenhum regime da região a condição de OSFL garante, por si só, neutralidade tributária completa. O que muda de país para país é onde o custo se infiltra: no Brasil, ele se infiltra do lado das compras, pela impossibilidade de se apropriar do crédito; na Colômbia, na fronteira entre atividade tributada e excluída, que exige uma contabilidade de receitas e custos segregada com rigor; no México, no risco de classificação formal que pode custar a autorização inteira; no Peru, na vigência ininterrupta de um registro administrativo. Tratar qualquer uma dessas frentes como um trâmite que a área contábil resolve uma vez por ano subestima seu impacto real sobre o orçamento operacional.

Implicações práticas para as OSFLs da região

A consequência operacional mais direta é que o IVA, ou seu equivalente, deixou de ser, para qualquer OSFL com estrutura de custos intensiva em compras (saúde, insumos tecnológicos, infraestrutura), uma linha neutra no orçamento. Vale a pena incorporar algumas práticas concretas:

Quantificar o imposto residual como uma rubrica orçamentária explícita, e não como um custo diluído dentro de cada compra. As organizações que operam hospitais, laboratórios ou infraestrutura educacional deveriam estimar, ao menos anualmente, quanto representa o IVA ou o IBS/CBS não creditável sobre seu gasto de capital e de insumos, porque essa é a única forma de negociar com seriedade reajustes de tarifa em contratos com o Estado, como os que sustentam boa parte dos hospitais filantrópicos brasileiros vinculados ao PROADI-SUS.

Segregar contabilmente atividades tributadas e excluídas desde o registro da operação, não no momento de declarar. Na Colômbia e no México, boa parte das autuações da administração tributária contra ESALs e donatárias tem origem em uma contabilidade que mistura receitas e custos sem rastreabilidade clara entre o que é tributado e o que é excluído.

Instalar um calendário de vigência de qualificações e registros como função de conformidade permanente, não sazonal. O caso peruano deixa uma lição exportável para qualquer país que condicione benefícios a um registro ativo: a perda de vigência, ainda que temporária, tem efeito retroativo sobre operações já executadas.

Participar, enquanto houver janela para isso, dos processos de ajuste normativo. O período de transição brasileiro até 2033 e a regulamentação ainda pendente em vários países da região são, na

prática, a única etapa em que o setor pode influenciar o desenho técnico do benefício antes que ele fique consolidado.

Uma assimetria que convém nomear com precisão

A contribuição mais útil do debate brasileiro não é a solução, que ainda não existe, mas o vocabulário. Falar em "imposto residual não creditável", em vez de "carga tributária" de forma genérica, obriga a quantificar o problema e a discuti-lo com números concretos diante de um ministério da fazenda ou de um congresso, em vez de apelar de forma genérica para a condição sem fins lucrativos da entidade. As OSFLs da região vêm pedindo, com razão, há anos, maior rigor técnico em sua informação financeira; esse mesmo rigor, aplicado a medir o custo tributário que não aparece em nenhuma demonstração de resultado porque ficou absorvido no custo das vendas, é a ferramenta que falta a elas para participar do desenho das reformas que as afetam, em vez de reagir a elas depois de publicadas.

Fontes

- Presidência da República / Casa Civil, *Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025* (Brasil). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm
- Observatório do Terceiro Setor, *A Reforma Tributária e os desafios para as instituições filantrópicas*, 19 de dezembro de 2025 (Brasil). <https://observatorio3setor.org.br/a-reforma-tributaria-e-os-desafios-para-as-instituicoes-filantropicas/>
- Mattos Filho, *Reforma Tributária e as particularidades do Terceiro Setor* (Brasil). <https://www.mattosfilho.com.br/unico/reforma-tributaria-particularidades-3-setor/>
- Paulo Melo, *O impacto da reforma tributária sobre as entidades filantrópicas: um alerta urgente*, 22 de setembro de 2026 (Brasil). <https://www.paulomelo.blog.br/2026/09/o-impacto-da-reforma-tributaria-sobre.html>
- Gerencie.com, *Las entidades sin ánimo de lucro no tienen exención de IVA en función de su calidad* (Colômbia, com referência ao artigo 437 do Estatuto Tributário e ao Parecer DIAN 007833 de 2017). <https://www.gerencie.com/las-entidades-sin-animo-de-lucro-no-tienen-exencion-de-iva-en-funcion-de-su-calidad.html>
- IDC Online, *¿Cuáles son los efectos del IVA para las donatarias autorizadas?* (México, com referência aos artigos 8º, 9º, 15, 22 e 25 da Lei do IVA). <https://idconline.mx/fiscal-contable/2024/11/15/cuales-son-los-efectos-del-iva-para-las-donatarias-autorizadas>
- Infobae Perú, *Sunat cambia las reglas para las donaciones en Perú: ¿cómo afecta a donantes y adjudicatarios?*, 4 de maio de 2026 (Peru). <https://www.infobae.com/peru/2026/05/04/sunat-cambia-las-reglas-para-las-donaciones-en-peru-como-afecta-a-donantes-y-adjudicatarios/>
- El Peruano, *Sunat precisa la aplicación de la donación como gasto deducible* (Peru, com referência à alínea "x" do artigo 37 da Lei do Imposto de Renda). <https://elperuano.pe/noticia/113096-sunat-precisa-la-aplicacion-de-la-donacion-como-gasto-deducible>



Corporación Latinoamericana
para el Desarrollo de las OSFL